

## Artículo 20

**1. La Asamblea puede exigir la responsabilidad política del Presidente o del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Ésta habrá de ser propuesta, al menos, por un 15 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.**

**2. La moción de censura no podrá ser votada hasta que concurran cinco días desde su presentación. Si la moción de censura no fuese aprobada por la Asamblea, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.**

**3. Si la Asamblea adoptara una moción de censura, el Presidente junto con su Gobierno cesará, y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente de la Comunidad de Madrid<sup>1</sup>.**

## COMENTARIO

ALMUDENA MARAZUELA BERMEJO

### I. EXÉGESIS DEL PRECEPTO

#### 1.1. La Moción de Censura<sup>1</sup>

##### 1.1.1. Generalidades

La forma de gobierno parlamentaria en el ámbito de las Comunidades Autónomas ha calado por iniciativa del esquema institucional aquilatado por

---

<sup>1</sup> Redacción dada a este artículo por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio (BOE núm. 162, de 8 de julio de 1998).

<sup>2</sup> Sobre el examen doctrinal de esta iniciativa es de particular interés la consulta por restringir el estudio al ámbito de la Asamblea de Madrid de: MARTÍN DE HIJAS MERINO, Mónica: «Las relaciones...», pp. 229 y 230.

Además, puede confrontarse la bibliografía existente sobre esta capital iniciativa: BAR CENDÓN, Antonio: «Artículo 17: La moción de censura» en *Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón*, BERMEJO VERA, José (Ed.), Madrid, 1985, pp. 182 a 190; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: «Comentarios al artículo 112», en *Comentarios a la Constitución Española de 1978*: ALZAGA VILLAAMIL, Óscar (Dir.), Ed. Cortes Generales y Edersa, Madrid, 1978, Tomo VIII, pp. 825 y ss; GONZALO GONZÁLEZ, Manuel: «Crónica parlamentaria: La moción de censura al Gobierno Suárez», en *Revista de Derecho Político*, núm. 7, año 1980; MONTERO, José Ramón: «La moción de censura en la Constitución de 1978: Supuestos constituyentes y consecuencias políticas», en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 12 (Nueva época), año 1979, pp. 5 a 40; y «Mociones de censura y mociones de reprobación» en RAMÍREZ, Manuel (Ed.): «El desarrollo de la Constitución Española de 1978», Pórtico, Zaragoza, 1982; OLLERO GÓMEZ, Carlos: «Democracia y moción de censura en la Constitución Española de 1978» en *Gobierno y Administración en la Constitución*, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Vol. II, Madrid, 1988, pp. 1.315 a 1.328; LÓPEZ GUERRA, Luis: «Moción de Censura», en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Volumen III; Civitas, Madrid, 1995, pp. 4.310 y 4.311; SAN-

el artículo 152 que han articulado singularmente las normas institucionales básicas autonómicas, y lo ha hecho en la versión racionalizada que prosperase en la Alemania de posguerra por extrapolación de la regulación, nuevamente, debida al Reglamento del Congreso de los Diputados.

A través de la moción de censura el Parlamento manifiesta al Gobierno la retirada de su apoyo expresado en el momento del acto de investidura. Se abre, así, una crisis que podrá superarse con el apoyo a un nuevo candidato propuesto por la propia Cámara o en caso de resultar infructuosa con la preservación de los cargos y de la acción de gobierno por el Presidente y su Gabinete. Se sitúa esta capital iniciativa, pues, como contrapunto a la facultad de disolución anticipada de la Cámara en manos del Presidente del Gobierno.

Entre las notas características más destacables de esta iniciativa podemos enunciar las siguientes:

a) La moción de censura en el ámbito de la Comunidad de Madrid tiene carácter constructivo, lo cual significa que no tiene como efecto inmediato el cese del Gobierno que permanecerá si no se ratifica la censura; es, por ello, por lo que habrá de presentarse un candidato alternativo por quienes formulen la iniciativa, y sólo de no obtener el Gobierno el respaldo preciso y, por ende, de aprobarse la moción se produce la sustitución, destacándose una clara voluntad del Legislador orgánico de lograr la permanencia y estabilidad del sistema político autonómico madrileño, por cuanto señalaremos.

b) La gravedad de la iniciativa y los efectos que tiene sobre la acción de gobierno determinan la imposición de ciertos requisitos cualitativos de legitimación (188.1 del Reglamento), ciertas dosis de prudencia (188.4) y un límite temporal para su ejercicio (190), evitando un ejercicio irresponsable de este instrumento de control–responsabilidad o sanción.

c) Dada la trascendencia de la iniciativa la competencia se reserva al Pleno de la Cámara (188.4).

d) Frente al silencio guardado caso de presumirse fatídica la cuestión de confianza, la presentación de la moción de censura no puede ser contrarrestada con la disolución de la Cámara por parte del Presidente del Gobierno (21.2 del Estatuto de Autonomía).

En efecto, consustancial a la clásica forma de gobierno se sitúa esta iniciativa y sobre las premisas descritas, ha quedado engarzada en nuestro sistema gracias al Estatuto de la Comunidad, en cuyo artículo 20<sup>3</sup> se predica como Derecho cogente o indisponible por parte del Legislador ordinario que «1. *La Asamblea puede exigir la responsabilidad política del Presidente o del Gobierno*

---

CHEZ DE DIOS, M: «La moción de censura en el régimen parlamentario», Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1990 Colección: Colección Tesis doctorales, núm. 49/90; y «La moción de censura: (un estudio comparado)», Congreso de los Diputados, Madrid, 1992; VÍRGALA FORURÍA, Eduardo: «La moción de censura en la Constitución de 1978», Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.

<sup>3</sup> La redacción de este precepto es resultado de la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio.

*mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.», facultad reiterada por el artículo 187 del Reglamento de la Asamblea : «Conforme a lo previsto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Asamblea puede exigir la responsabilidad política del Presidente de la Comunidad de Madrid o del Consejo de Gobierno mediante la adopción de una moción de censura.».*

No cabe duda de que, dados sus efectos de resultar respaldada por la Cámara con la confianza al candidato que con ella se encumbra, se erige como el mecanismo de control más importante que puede ejercitarse por la Asamblea sobre el Gobierno, manifestando con su presentación una oposición frontal a la actuación política del Ejecutivo y proponiendo una voluntad abierta de cambio de Gobierno y en el modo de gobernar.

Es, pues, una materia que, sin duda, entra de lleno en el ámbito de las preceptivas relaciones entre la Asamblea y el Gobierno que tiene que contemplar el Reglamento de la Asamblea [*ex art. 12.2.a)* del Estatuto de Autonomía<sup>4</sup>].

En efecto, el Reglamento en su versión de 1984 en el Título VII «De la Investidura, de la Cuestión de Confianza y de la Moción de Censura», Capítulo III «De la Moción de Censura» articulaba en los preceptos 135 a 139 esta iniciativa de tan hondo calado político, que ha pasado a conformar el Capítulo III del Título X del vigente Reglamento de 1997, comprensivo de los artículos 187 a 190. La regulación vigente ha introducido ciertas novedades que singularmente advertiremos al hilo de la exposición.

### 1.1.2. Elementos subjetivos

La titularidad para impulsar la moción de censura corresponde al menos al quince por ciento de los Diputados (arts. 20.1 y 188.1 del Reglamento de la Asamblea)<sup>5</sup>. Sobre los 120 Diputados con que actualmente cuenta la Asamblea de Madrid el guarismo resultante de esta operación aritmética es dieciocho. Aun cuando no es este el presente caso, la Disposición Adicional Primera del Reglamento recoge el presupuesto de hecho de cocientes resultantes no enteros resueltos corrigiéndose «*por exceso si fueran superiores a las cinco décimas y por defecto si fueran iguales o inferiores*».

Respecto del derecho a impulsar la iniciativa, se ha seguido el esquema nacional de legitimar a los Diputados y no a los Grupos Parlamentarios. Esta posibilidad, que se planteó sin éxito a nivel nacional durante el proceso constituyente, hubiera abierto, sin duda, la inestabilidad política al permitir que uno o dos Grupos Parlamentarios minoritarios pudieran presentar mociones de censura. Por esta causa el modelo de legitimación del Texto Constitucional fue reproducido, sin excepción, en los Estatutos de Autonomía que acogieron la regulación de forma expresa y sin remisiones.

<sup>4</sup> El artículo 13.5 del texto previo estatutario a la reforma de 1998 incidía en este mismo particular.

<sup>5</sup> Este porcentaje es más elevado que el, por ejemplo requerido por el Congreso de los Diputados que requiere un diez por ciento. Bastante más reducidas ambas que la cuarta parte exigida, por ejemplo, por el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 39.2).

En consonancia con la cuestión también ha de considerarse que es, sin duda, el Estatuto de la Comunidad más exigente con la cifra requerida que el marcado en el ámbito nacional, en el que se acota el número de firmantes en una décima parte. En relación con el resto de los sub-ordenamientos autonómicos el modelo seguido por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad se encuadra dentro del arquetipo mayoritario, siendo excepción bien los Estatutos que remiten la determinación del margen numérico de la iniciativa a una ley posterior (Galicia, País Vasco o Cataluña), bien los que fijan una proporción mayor que, por lo general, se fija en la cuarta o quinta parte de los Diputados (casos de: Andalucía, Comunidad Foral de Navarra o Comunidad Valenciana). En todos los casos los porcentajes se corresponden, no con el número presente de Diputados en la sesión, sino con el número de Diputados de derecho que conforman la Cámara.

El destinatario o sujeto pasivo de la moción de censura es directamente el Presidente del Gobierno, que lo es de la Comunidad, e indirectamente su Gobierno, por razón de la responsabilidad solidaria que predica nuestro sistema político.

#### 1.1.3. *Objeto de la moción de censura*

La moción de censura tiene por objeto provocar del Parlamento la manifestación de la quiebra en el apoyo o respaldo expresado por la Cámara con la investidura y el otorgamiento de la confianza al o a alguno de los candidatos alternativos propuesto por los Diputados firmantes de la iniciativa. Del respaldo a la iniciativa se colige el consiguiente rechazo al Presidente y su Gobierno.

Es requisito imperativo para que la Mesa acepte la iniciativa que en su texto se incorpore el candidato alternativo a Presidente, lo cual viene a ser clara manifestación del carácter constructivo de la moción de censura con la que se exige la unión del Parlamento no sólo para lograr la caída del Gobierno, sino que ha de ser lo suficientemente significativa como para ponerse de acuerdo también en la designación del Jefe del Ejecutivo y de la línea política subsiguiente a seguir. Este hecho convierte a la moción de censura en una iniciativa de difícil éxito que es utilizada con cuita por parte de los Grupos Parlamentarios, pues, políticamente hablando, el fracaso que sufra la oposición que firma tras la presentación de una moción de censura por falta del suficiente apoyo parlamentario comporta el fortalecimiento del Gobierno y, consiguientemente, el fracaso de la oposición firmante.

#### 1.1.4. *Sustanciación de la moción de censura*

La moción de censura se desarrolla a través de las siguientes fases o momentos:

### 1.<sup>a</sup> Fase de presentación o inicio.

Esta fase se agota con la conclusión y preceptiva presentación de un escrito ante la Mesa de la Cámara que debe cumplir cuatro requisitos:

- Será propuesta al menos por un quince por ciento de los Diputados.
- Incluirá un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, de entre los Diputados miembros de la Cámara (arts. 20.1 del Estatuto y 188.1 del Reglamento)
- Contendrá la motivación que justifique la iniciativa (artículo 188.1 del Reglamento).
- Figurará expresamente la aceptación por parte de quien es propuesto como candidato (art. 188.1 del Reglamento).

La iniciativa presentada ha de ser controlada tanto en lo que al cumplimiento de los requisitos formales reglamentarios se refiere, cuanto a su regularidad jurídica y a la viabilidad procedimental de la iniciativa. Corresponde como señala el Tribunal Constitucional *«una verificación liminar de la conformidad a Derecho de la pretensión deducida junto a un juicio de calificación sobre la idoneidad o procedimiento del procedimiento parlamentario elegido»* (SSTC 205/1990 y 78/2006).

Este control corresponde a la Mesa de cada Cámara *«por estar sujeta al ordenamiento jurídico, en particular a la Constitución y a los Reglamentos parlamentarios que regulan sus atribuciones y funcionamiento, y en aras de la mencionada eficacia del trabajo parlamentario, verificar la regularidad jurídica y la viabilidad procesal de las iniciativas, esto es, examinar si las iniciativas cumplen los requisitos formales exigidos por la norma reglamentaria. No obstante, el Reglamento parlamentario puede permitir o, en su caso, establecer, incluso, que la Mesa extienda su examen de las iniciativas más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre, claro está, que los escritos y documentos dirigidos a la Mesa, sean de control de la actividad de los Ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan, justamente, limitados materialmente por la Constitución, el bloque de la constitucionalidad o el Reglamento parlamentario pertinente. De modo que si la legalidad aplicable no impone límite material alguno a la iniciativa, la verificación de su admisibilidad ha de ser siempre formal, cuidando únicamente la Mesa de que la iniciativa en cuestión cumpla con los requisitos de forma que le exige esa legalidad»* (SSTC 205/1990, 225/1992, 38/1999, de 22 de marzo, 107/2001, 203/2001, 177/2002, 40/2003, 78/2006 ó 242/2006).

### 2.<sup>a</sup> Fase de admisión y calificación por la Mesa de la Cámara

Será, como ya apuntamos, la Mesa de la Asamblea a quien corresponde examinar que la moción de censura reúne los requisitos señalados estatutaria y reglamentariamente —se trata pues de una actividad de análisis meramente formal, sin que el órgano colegiado pueda entrar a deliberar sobre el

fondo o sobre la conveniencia u oportunidad política— deberá admitirla a trámite (art. 188.2 del Reglamento) y calificarla [49.1.c) del Reglamento] en el ejercicio de control de la «*regularidad de los escritos y documentos de índole parlamentaria*» (por todas, SSTC 38/1999, de 22 de marzo; 107/2001, de 23 de abril; 203/2001, de 15 de octubre; 177/2002, de 14 de octubre; 40/2003, de 27 de febrero; 78/2006, de 13 de marzo, o 242/2006, de 24 de julio).

En caso contrario, Mesa de la Cámara, en el ejercicio de control de legalidad, nunca de oportunidad, habría de rechazarla o inadmitirla.

Ni el Estatuto de Autonomía ni el Reglamento previenen una situación en contrario en la que la Mesa por apreciar el incumplimiento de alguno o varios de los requisitos antes enumerados hubiera de emitir el pertinente Acuerdo de no admisión, que en todo caso habría de ser adecuada y suficientemente motivado y posteriormente notificado a los firmantes, quienes podrían interponer un nuevo escrito, en este caso no de mera subsanación, sino de presentación cumplimentando todos los requisitos en el acto, sin que aquel infructuoso intento pueda servir para dar por cumplido el presupuesto de hecho que limite su presentación única en el respectivo período de sesiones.

En todo caso, en ejercicio del principio de lealtad institucional corresponderá a la Mesa, una vez haya sido admitido a trámite el escrito, dar cuenta formalmente de manera inmediata:

a) Al Presidente de la Comunidad, quien, sin duda, queda en una posición política difícil.

b) A la Junta de Portavoces, tras la pertinente convocatoria por la Presidencia de la Asamblea (art. 59), en ejercicio del principio de lealtad institucional con carácter urgente, en punto a que la Junta asuma la facultad que le corresponde por mor del artículo 61.1.g) del Reglamento, comunicando a los restantes Diputados la admisión a trámite de la iniciativa para garantizar el ejercicio de su derecho a presentar mociones alternativas en el plazo de dos días que acota el artículo 188.3, también del Reglamento.

### *3.ª Fase de presentación de eventuales mociones alternativas*

Con una imprecisión que hace albergar no pocas dudas en torno a si el *dies a quo* es el acto de admisión a trámite por la Mesa de la Cámara o lo es la comunicación a la Junta de Portavoces, el Reglamento faculta a que dentro de los dos días siguientes —que se entenderán hábiles en virtud del tenor del artículo 129.1 del Reglamento— puedan presentarse mociones de censura alternativas (esto es, propuestas que comprometan candidatos diversos), que deberán reunir los mismos requisitos contemplados por los artículos 20.1 del Estatuto y 188.1 del Reglamento y estarán sometidas a las mismas condiciones de admisión a trámite que las señaladas en el artículo 188.2 reglamentario, ya referidas en la fase de presentación algunas líneas atrás.

#### *4.ª Fase de conocimiento y toma de decisión por el Pleno respecto de la o las mociones de censura*

Transcurrido dicho plazo, el Presidente convocará<sup>5</sup> el Pleno para debate y votación de la moción de censura.

##### a) Debate de la moción de censura:

En el caso de que se hubiera presentado más de una moción de censura, el Presidente, oída la Junta de Portavoces, puede acordar el debate conjunto de todas las mociones propuestas que se hubieran incluido en el orden del día. En todo caso, las deliberaciones se articulan a través de los siguientes turnos enunciados por el artículo 189 del Reglamento de la Asamblea:

- Defensa de la moción por parte de alguno de sus firmantes, sin límite de tiempo.
- Eventual intervención<sup>7</sup> del candidato propuesto para exponer el programa político del Gobierno que pretende formar, sin límite de tiempo.
- Suspensión de la sesión por el Presidente<sup>8</sup> acto seguido.
- Intervención de un representante por cada uno de los Grupos Parlamentarios que lo solicite –que se hará de menor a mayor (113.3 del Reglamento)–, por tiempo máximo de treinta minutos respectivamente.
- El candidato propuesto podrá contestar individualmente o de forma global a todos los intervinientes, sin limitación de tiempo.
- Los representantes de los Grupos Parlamentarios tendrán derecho a réplica por tiempo máximo de quince minutos cada uno<sup>9</sup>.
- La intervención final del candidato propuesto, sin limitación de tiempo, cerrará el debate<sup>10</sup>.
- Finalizado el debate, el Presidente suspenderá la sesión por tiempo no superior a veinticuatro horas y anunciará la hora en que habrá de reanudarse para proceder a la votación de la moción de censura o mociones si se hubieran incluido en el orden del día.

Algunas precisiones breves: En primer término, llama poderosamente la atención el hecho de que este tipo de debates no prevea la intervención de quien todavía sigue siendo el Presidente del Gobierno, que puede ser «censu-

---

<sup>6</sup> Si la convocatoria se hiciera con carácter extraordinario habrá de tenerse en cuenta a efecto del cómputo de los días lo previsto por el artículo 129.2.a) del Reglamento.

<sup>7</sup> El Reglamento de 1984 empleaba en el apartado 1 del artículo 137 el tenor preceptivo, y no la eventualidad del turno que acoge el vigente Reglamento, lo que no deja de entenderse dada la capital importancia que el contenido de lo que será el programa tiene y este es el acto de su presentación a la Cámara.

<sup>8</sup> El Reglamento de 1984 prescribía que esta había de tener un carácter no inferior a las veinticuatro horas, plazo en la actualidad inexistente.

<sup>9</sup> En el Texto de 1984 el tiempo para esta réplica se reducía a diez minutos para cada uno de los intervinientes.

<sup>10</sup> Este turno se presumía como respuesta a la réplica prevista por el apartado 2 del artículo 137. Ahora se menciona expresamente.

rado» por el éxito de una moción *inaudita parte* por el Parlamento. La audiencia al interesado se produce como garantía en el ámbito administrativo, incluso en el seno del Parlamento se garantiza este trámite en todos los procedimientos de ejercicio de la potestad disciplinaria contra los Diputados; se esté o no en desacuerdo nos limitamos a constatar el hecho de la omisión de la autodefensa dialéctica.

En segundo lugar, de la redacción del precepto parece posible la presentación de mociones de censura que, por las causas que fuera, no se hubieran incluido en el orden del día dejándose para una sesión posterior, caso en el que, sin duda por razón de la exigencia de que «*el Presidente suspenderá la sesión por tiempo no superior a veinticuatro horas y anunciará la hora en que habrá de reanudarse para proceder a la votación*» habrían de votarse, y caso de que no se respaldaran habría de proseguirse con la deliberación y votación de las «pendientes» siempre dentro del plazo reglamentario según se colige del tenor del artículo 188.4. En caso contrario, de haberse aprobado alguna de las mociones automáticamente, como veremos, decaen las restantes.

#### b) Acto de votación de la moción de censura

El Estatuto (art. 20.2) y el Reglamento (art. 188.4) aquilatan lo que la doctrina especializada ha denominado como plazo de enfriamiento: «*La moción de censura no podrá ser votada hasta que concurran*<sup>11</sup> *cinco días*<sup>12</sup> *desde su presentación*», el Reglamento, además, añade un límite máximo para garantizar la estabilidad política de la Comunidad evitando prolongar la incierta situación de *impasse* y que el excesivo enfriamiento desemboque en fatídica hipotermia, de modo que las votaciones no podrán tener lugar «*después de veinte días*<sup>13</sup> *desde la presentación de la primera*» (artículo 188.4).

Si se hubiera presentado más de una moción de censura, las mociones sobre las que se haya deliberado han de ser sometidas a votación por separado, siguiendo el orden de su presentación.

Partiendo de que «*Para la deliberación y adopción de acuerdos, la Asamblea y sus órganos han de estar reunidos reglamentariamente y con la asistencia de la mayoría de sus miembros [...]*» (118.1), la votación se lleva a efecto a la hora fijada por el Presidente (art. 189.8 del Reglamento) y habrá de celebrarse por medio de una votación pública por llamamiento (art. 125.2 párrafo tercero), en la que: «*un Secretario nombrará a los Diputados y éstos responderán «sí», «no» o abstención*». *El llamamiento se realizará por orden alfabético de primer apellido, comenzando por el Diputado cuyo nombre sea sacado a suerte. Los miembros del Consejo de Gobierno que sean Diputados y los miembros de la Mesa votarán al final, por orden inverso de precedencia.*».

<sup>11</sup> El Estatuto emplea incorrectamente este término. Pese a no haberse rectificado por medio de una corrección de errores, parece claro que para que el precepto tenga sentido debería decir transcurran.

<sup>12</sup> Si la convocatoria se hiciera con carácter extraordinario habrá de tenerse en cuenta a efecto del cómputo de los días lo previsto por el artículo 129.2.a) del Reglamento.

<sup>13</sup> Si la convocatoria se hiciera con carácter extraordinario habrá de tenerse en cuenta a efecto del cómputo de los días lo previsto por el artículo 129.2.a) del Reglamento.



La aprobación de la moción de censura requiere el respaldo por la mayoría absoluta de la Asamblea, esto es, de un número de votos afirmativos superior a la mitad de miembros de pleno derecho de la Asamblea (art.119.2 párrafo segundo).

En el supuesto de aceptarse una moción de censura, no se someterán a votación las restantes que se hubieren presentado, que se tendrán por decaídas.

Este acto de la votación genera en un mismo el mismo acto el de votación de la investidura, el derribo o deposición y la investidura tácita.

#### 1.1.5. *Efectos de la moción de censura*

El primero de los efectos que tiene la simple presentación y admisión a trámite de una moción de censura es el de bloquear o impedir el ejercicio de la facultad de disolución de la Asamblea por el Presidente del Gobierno (*ex art. 21.2 del Estatuto de Autonomía*).

Mayor calado en lo que a los efectos respecta tiene la aprobación de la iniciativa, para lo que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea:

a) En caso de que la Asamblea adoptara una moción de censura, el Presidente junto con su Gobierno —decreta el Estatuto— cesarán. El Reglamento de la Asamblea, por el contrario, introduce una cierta dosis de confusión al requerir el artículo 189.10 que el censurado presente formalmente su dimisión a la Asamblea. Sin duda, el Reglamento incurre en una incorrecta terminología que, queriéndolo o no, innova el Texto estatutario. Una cosa es el cese que comporta la destitución con carácter automático desde el momento mismo en que el resultado de la votación es proclamado por la Presidencia de la Asamblea; y otra diversa la dimisión que requiere de un acto formal posterior en el que el titular expresa su renuncia voluntaria, en este caso al cargo. La solución en caso de contradicción normativa entre los términos del Estatuto y el Reglamento es insoslayable, debiendo prevalecer el primero sobre la base del principio de jerarquía normativa.

b) El efecto inmediato es que el candidato incluido en la moción exitosa se entiende investido *ope legis* de la confianza de la Cámara, produciéndose una investidura tácita y automática. La adopción de la moción se comunicará por el Presidente de la Cámara al Rey y al Gobierno de la Nación, a los efectos de su nombramiento como Presidente de la Comunidad de Madrid, tras lo cual tomará posesión de su cargo ante la Mesa.

Por otra parte, si la moción no prosperase por no contar con el respaldo de la mayoría absoluta, las consecuencias de la fallida moción recaen sobre sus signatarios, quienes no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones (art. 20.2 del Estatuto), previsión a la que el Reglamento en el artículo 190 del vigente Reglamento adiciona el término ordinarias. El artículo

139 del Reglamento de 1984 daba solución al eventual supuesto de que la interposición de una moción de censura se presentase durante el período que media entre los períodos ordinarios de sesiones sentenciando que se imputaría al «siguiente período». La eventualidad no es conscientemente contemplada por el texto vigente, frente a cuyo silencio sólo pueden plantearse dos interpretaciones:

a) En primer lugar, considerar que existe una laguna que habrá de ser cubierta (55.2).

b) En segundo lugar, estimar que los artículos 20.2 del Estatuto y 190 del Reglamento se trasluce la inserción de un nuevo límite temporal a la presentación de las mociones de censura: el de formularse en alguno de los dos períodos de sesiones –de febrero a junio o de septiembre a diciembre–, cuando el Parlamento se haya orgánica y funcionalmente en «situación de normalidad». Por esta segunda posición, sin duda, nos decantamos en cuanto que el límite se esgrime como refuerzo de la estabilidad y racionalidad de la forma de gobierno parlamentaria.

## **II. DESARROLLO LEGISLATIVO**

Nos remitimos a la reseñada en el contenido de la exégesis (epígrafe 1 del presente artículo).

## **III. DERECHO COMPARADO ESTATAL Y AUTONÓMICO**

### **3.1. Derecho Comparado Estatal**

Constitución Española: artículos 113 y 114.

Reglamento del Congreso de los Diputados: artículos 175, 176, 177, 178 y 179.

### **3.2. Derecho Comparado Autonómico**

Estatuto de Autonomía de Andalucía: artículos 126 y 127.2.

Estatuto de Autonomía de Aragón: artículos 50 y 52.3.

Estatuto de Autonomía de Canarias: artículo 21.2.

Estatuto de Autonomía de Cantabria: artículo 22.3, 4, 5 y 6.

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: artículo 21.

Estatuto de Autonomía de Castilla y León: artículos 36 y 37.

Estatuto de Autonomía de Cataluña: artículos 67.7 y 75.

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: artículo 28.2 y 3.

Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares: artículos 56.4 y 5, y 57.8.

- Estatuto de Autonomía de Extremadura: artículos 32.1, 4 y 5, y 34.2.  
Estatuto de Autonomía de Galicia: artículos 10.1 y 15.4.  
Estatuto de Autonomía de La Rioja: artículo 24.7.  
Ley Orgánica sobre Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: artículos 35 y 30.3.  
Estatuto de Autonomía del País Vasco: artículos 32.1 y 33.3.  
Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias: artículo 35.2, 3, 4, 5 y 6.  
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia: artículos 27.4, 31.6, 33.4, 5 y 6.

#### IV. JURISPRUDENCIA

Consúltese la doctrina dictada en las siguientes resoluciones del Tribunal Constitucional:

- **STC 16/1984, de 6 de febrero de 1984.** Impugnación conforme a la facultad atribuida al Gobierno por el Título V de la LOTC y recurso de amparo. Asuntos 617 y 619/1983.
- **ATC 706/1986, de 17 de septiembre de 1986.** Recurso de amparo. Asunto 220/1986.
- **ATC 525/1987, de 6 de mayo de 1987.** Recurso de amparo. Asunto 1.411/1986.
- **STC 141/1990, de 20 de septiembre de 1990.** Recurso de inconstitucionalidad. Asunto 828/1985.
- **ATC 56/1992, de 21 de febrero de 1992.** Recurso de amparo. Asunto 2.182/1991.
- **STC 22/1997, de 11 de febrero de 1997.** Recurso de amparo. Asunto 1.084/1991.
- **STC 114/1999, de 14 de junio de 1999.** Recurso de amparo. Asunto 4.186/1996.
- **ATC 136/2001, de 31 de mayo de 2001.** Recurso de amparo Asunto 671/1999.
- **STC 44/2002, de 25 de febrero de 2002.** Recurso de Amparo. Asunto 1.371/1998.